



Programa de Formación

La Violencia Sexual como una forma de tortura y expresión de poder sobre las mujeres Caso Castro Castro

Rubia Abs da Cruz

La Violencia Sexual como una forma de tortura y expresión de poder sobre las mujeres – Caso Castro Castro

Rubia Abs da Cruz¹

“No existe tortura que no tome en cuenta el género de la víctima. No existe tortura ‘neutral’.”²

El artículo se centrará en la violencia de género, analizándose una decisión sin precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció la existencia de una “violencia específica” contra las mujeres, teniendo como base el caso Castro Castro³, que se trata de una masacre ocurrida contra los internos e internas en el Penal Castro Castro en la ciudad de Lima, Perú, entre los días 6 y 9 de mayo de 1992. Esta decisión será analizada por haber sido la primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace un análisis de género, reconociendo que la violencia contra las mujeres, aún en el mismo contexto de violencia contra los hombres ocurrido en el centro penal, entraña un carácter sexista y que discrimina a las mujeres. Por su condición de embarazadas, o por las violencias sexuales sufridas, además de la violencia física, moral y psicológica a las que fueron sometidas todas las personas en este contexto de privación de libertad por razones políticas, y que violó diversos derechos garantizados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, empezando por el hecho mismo de los encarcelamientos, pues fueron arbitrarios y no derivados de sentencias condenatorias.

El 9 de setiembre del 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁴ presentó la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, se la llamará solamente Corte en este artículo), que en el ejercicio de su jurisdicción contenciosa aplica e interpreta la Convención Americana cuando un caso llega a su jurisdicción, y así puede declarar la responsabilidad internacional de un Estado Parte por haber violado sus disposiciones, lo que sucedió en el presente caso.

Se reconoció en esta decisión el uso del poder estatal para violar sexualmente a las mujeres como una forma de castigo y represión en un conflicto interno o incluso de guerra, que no sólo afecta directamente a las mujeres, sino que también tiene la intención de dar una “lección” a la parte contraria. Entendió la Corte que las formas de represión, castigos y violencias sufridas por las prisioneras y prisioneros del Centro Penal se encuentran enmarcadas y definidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en tanto que en los casos de las mujeres se constató que las torturas no eran neutrales, sino dirigidas específicamente a su condición de mujeres.

¹ Abogada Coordinadora General de THEMIS. Integrante del CLADEM Brasil, experta en Derechos Humanos por la Universidad de Chile y American University College of Law, Washington.

² Página 96 de la Sentencia sobre El Caso Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, sobre violencia de género. <http://www.corteidh.or.cr/buscaadores.cfm>

³ Caso Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, sitio web: <http://www.corteidh.or.cr/buscaadores.cfm>

⁴ En el reglamento actual de la CIDH se realizaron cambios respecto a la forma de encaminar. Para más informaciones, página web: <http://www.corteidh.or.cr>

Debido a la constatación de que la violencia sexual es una de las formas más comunes de violencia contra la mujer, y que esta forma de violencia reproduce patrones de conducta que imponen roles sexuales diferenciados y jerarquizados, es que se consideró relevante escribir sobre el Caso Castro Castro, en el que la Corte reconoció una violencia de género específica en el tratamiento y la tortura hacia las mujeres en este establecimiento.

El tema de la violencia sexual contra las mujeres y de la impunidad se convirtió en uno de los puntos centrales de la agenda feminista y ésta ha sido la condición histórica que llevó al movimiento a mirar más de cerca hacia las violencias sexuales contra las mujeres, tanto en su vida cotidiana como en las guerrillas, las guerras, los conflictos políticos, en el sistema penitenciario y de seguridad y en la justicia, ya que durante mucho tiempo, las agresiones de los hombres contra las mujeres en la sociedad han sido justificadas y consideradas naturales, incluso en el ámbito del Derecho. Tal vez por eso las mujeres han sido ignoradas por siglos como personas capaces de ejercer plenamente sus derechos. En Brasil, las mujeres solían ser asesinadas por sus maridos, quienes alegaban haber sido traicionados, para justificar la legítima defensa de la honra (*legítima defesa da honra*), basado en los patrones culturales sexistas, que valoran más al ‘deshonrado’, que el derecho a la vida de las mujeres asesinadas. Las mujeres en la década de los 70 se unieron con el lema: *Quien ama no mata!*, dado que muchos hombres alegaron que amaban a sus mujeres, y que fueron presionados socialmente al feminicidio⁵ como una forma de “lavar el honor”.

Cabe señalar que la violencia de género es aquella que se da como consecuencia de los roles sociales masculino y femenino asignados al hombre y a la mujer, que determinan culturalmente la dominación de la sociedad por el hombre. Es un problema a nivel mundial ligado al poder, privilegios y control masculinos. Afecta a las mujeres más allá de su edad, color, etnia, religión, nacionalidad, orientación sexual o condición social. En el modelo existente, los hombres detentan el poder de determinar la conducta de las categorías socialmente asignadas que cuentan con la aprobación social o la tolerancia para sancionar conductas que consideren desviadas.

Sin embargo, la cultura de género ha sido insuficiente para garantizar el silencio y la complicidad de las mujeres a los dictámenes de los hombres, llevando al hombre a hacer uso de la fuerza o de la violencia.

Sobre la base de violencia de género, es que la Corte consideró que la violencia sexual es una práctica que tiene como sustrato una relación jerárquica de poder del hombre sobre la mujer. Tema histórico y culturalmente presente en las relaciones de poder, la violencia sexual está ligada a una estructura social desigual, que coloca la mujer en un papel social de inferioridad, incluso en el sistema judicial.

Estos crímenes contra la integridad sexual utilizados como forma de tortura fueron cometidos mayoritariamente contra las mujeres, siendo crímenes que dañan a la humanidad y, en este caso, especialmente a las mujeres. Las violaciones sexuales tenían como objeto la degradación, humillación y tortura de las víctimas. El reconocimiento de las violencias sexuales de género como una forma de tortura no neutral, demuestra un avance en la jurisprudencia y la cultura jurídica. La decisión de la Corte es de suma importancia porque permite sancionar y garantizar el derecho al acceso a la justicia de forma equitativa y sin discriminaciones, aportando para la construcción de una nueva cultura que no permita la reproducción de violencia contra las mujeres.

⁵ Feminicidio es la nomenclatura utilizada para definir homicidio contra mujeres en situaciones de violencia doméstica y familiar y cuando estas mujeres son asesinadas por sus maridos, amantes, parejas o novios y por sus “ex”.

Dos hechos analizados por la Corte

Aunque las violaciones a los derechos humanos en el centro penal fueron muy diversas, el artículo se centrará en el análisis de violaciones de género, sin detenerse detalladamente sobre todas las demás formas de violaciones ocurridas en el Centro Penal Castro Castro, buscándose trabajar con las consecuencias jurídicas de tales violaciones en relación con la Convención Americana. La Corte, para emitir tal decisión, se basó en precedentes como la competencia, y el contexto jurídico, los procedimientos ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos y procedimientos de la propia Corte, actuando en la verificación de la responsabilidad internacional del Estado, haciendo un análisis sobre las víctimas, sobre los hechos y derechos violados, y sobre las pruebas presentadas, testigos y pericias.

Es significativo que el Estado haya llevado a cabo la operación militar llamada “Operativo Mudanza I” justamente en un día de visitas a las mujeres. Además, el ataque fue realizado en el fin de semana del Día de la Madre. La violencia fue planeada para que hubiera una punición ejemplar de las prisioneras y los prisioneros políticos, ya que la violencia fue presenciada por sus propias madres, hermanas o esposas. El domingo que se celebraba el Día de la Madre, las madres y mujeres de los internos e internas lo pasaron buscando cadáveres en las morgues o se encontraban en los hospitales para visitar a las mujeres que habían sobrevivido. De esta forma, varias prisioneras sobrevivientes que eran madres, llevarían para siempre en la memoria la relación entre el día de la madre y su extremo sufrimiento por la muerte de decenas de mujeres igualmente madres.

Hubo una violencia directa contra las mujeres prisioneras e indirecta contra las madres, hermanas y esposas que vinieron a visitar a las mujeres que se encontraban presas, sometiéndolas a tortura psicológica al hacerlas testigas de los bombardeos, gritos y agresiones físicas y verbales por parte de las autoridades de la operación. Durante estos ataques tiraron bombas de agua, bombas de gas lacrimógeno, balearon y golpearon a las mujeres. Muchas de estas mujeres estaban embarazadas o en compañía de sus hijo/as. Estas mujeres fueron, además, amenazadas de muerte si no se retiraban del lugar en el que estaba por realizarse “la operación”.

La decisión de la Corte reconoció que hubo incumplimiento por parte del Estado peruano en relación con el artículo I.1 de la Convención Americana, entre otros, señalándose el artículo y los hechos que siguen:

Artículo I.1: Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Más de un centenar de víctimas, en este caso, eran mujeres, para quienes las consecuencias de las violaciones de derechos humanos fueron especialmente graves, teniendo en cuenta que el ataque fue inicialmente dirigido a cerca de 133 mujeres que se encontraban en el Pabellón I-A de la penal Miguel Castro Castro, con el fin de exterminarlas. Muchas de las internas fueron asesinadas a quemarropa.

Es importante observar que murieron 41 internos y solamente 1 policía, así como que el número de heridos fue de aproximadamente 190 internos y sólo 9 agentes de la policía (párrafo 197.40 de la

sentencia). El Estado no estableció las causas de muerte o lesiones de los agentes de policía. No fue probado, por el Estado del Perú ante la Corte la existencia de un motín o que las internas estuviesen armadas, o algún otro hecho que justificara el ataque denominado Operativo Mudanza I.

Las prisioneras fueron tratadas por los agentes del Estado con desprecio y violencia desde el inicio del ataque. Esta situación de violencia produjo consecuencias especialmente graves a las víctimas, muchas de las cuales estaban embarazadas. El ataque empezó en el único pabellón de la cárcel ocupado por mujeres, quienes después de la conclusión de la operación fueron sometidas a condiciones perjudiciales a su dignidad como mujeres. Las mujeres fueron víctimas de abuso físico o emocional durante el traslado y en las instalaciones correccionales hacia donde fueron llevadas. Igualmente, las que estaban heridas fueron trasladadas desnudas al hospital y obligadas a permanecer así durante semanas, cercadas por personas armadas, sin el permiso de lavarse. Sólo podían ir al baño acompañadas por un guardia armado y manteniendo la puerta abierta.

Las internas Eva Chalco, Vicente Genua López y Sabina Quispe Rojas, en el momento de los hechos en Castro y Castro se encontraban embarazadas. Tenían respectivamente, 7, 5 y 8 meses de gestación. Las internas Eva Chalco y Sabina Quispe no recibieron ningún tipo de atención durante el parto, y Sabina ni siquiera en el puerperio. Ellas se encontraban en la cárcel de Cachinche y Chorrillos. (197.57). Las mujeres embarazadas sufrieron violaciones específicas. Eva Chalco estaba embarazada de 7 meses y dio a luz prematuramente el 27 de junio de 1992. Sadi, hijo de Eva Chalco, fue considerado en la decisión como si hubiese estado presente en el Pabellón 1A, ya que estaba a punto de nacer, habiendo sido considerado como una víctima directa de todo el ataque, como alguien que estaba físicamente en el vientre de Eva. Como consecuencia presenta dificultades emocionales, habiendo sido alejado de su madre por más de 10 años.

El testimonio de varias víctimas y expertos muestran que las mujeres fueron torturadas de las más diversas formas. Asimismo, se demostró que no hubo ningún tipo de consideración por las mujeres embarazadas, enfermas o ancianas. Algunas de las víctimas ya no pueden trabajar debido a las graves secuelas de la tortura. Una de las víctimas se manifestó ante la Corte pidiendo justicia y que “estos hechos no queden impunes y que le sea otorgada una justa reparación por los daños ocasionados a su familia, a su salud física y mental y a su honra”.⁶

“Las víctimas han sufrido una acumulación de traumas, razón por la cual el daño psicológico es más profundo y más duradero. El diagnóstico que corresponde a semejantes experiencias es el de “estrés post-traumático complejo”. El paso del tiempo no produjo ningún efecto sanador en ninguno de los entrevistados, quienes continúan en un proceso patológico post-trauma. ‘El factor impunidad contribuye muchísimo en impedir una recuperación’.”⁷

Las víctimas mujeres sufrieron una acumulación aún mayor de traumas, debido a que ocurrió además una violencia de género. Como afirmó Ana Deutsh,⁸ hubo tortura psicológica a través de una suerte de prohibiciones, como la de ir al baño solas, de recibir visitas, de leer o trabajar, de salir de la celda, donde eran mantenidas muchas veces desnudas y sin luz. Todas estas violencias generaron secuelas biológicas, ansiedad, desesperación e impotencia. Sus familiares también sufrieron por no tener noticias, por no lograr visitarlos o por haber sido objeto de violencias como buscar a sus familiares en medio de los cadáveres desmembrados y en descomposición, e incluso por ser acusados de ser “familiares de terroristas”.

⁶ Página 36 punto 10, testimonio de Nieves Miriam Rodríguez Peralta, transcrito de la Sentencia del caso Castro y Castro.

⁷ Ana Deutsh, experta en atención a las víctimas de tortura, quien declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

⁸ Página 42 de la Sentencia del Caso Castro y Castro. <http://www.corteidh.or.cr/buscadores.cfm>

El testimonio de Gaby Balcazar Medina en la transcripción de la sentencia, demuestra que hubo una violencia de género, más allá de las formas de violencia y tortura que ocurrieron con los demás prisioneros. Ella no recibió la atención médica necesaria. En su cuerpo, que estaba cubierto de sangre y heridas, sin que se pudiera bañar, se posaban moscas, sin que ella pudiera espantarlas. Tampoco podía alimentarse, y sumado a esto, la mantenían desnuda delante de todos los militares, que a menudo, le apuntaban los fusiles, lo que podría ser considerado como una amenaza de muerte o de penetración violenta.

Thomas Wenzel,⁹ experto en desórdenes psicológicos en sobrevivientes de la tortura y trastorno de estrés postraumático, se refirió a cuatro factores importantes que pueden ocasionar grandes secuelas en las víctimas: la exposición a la violencia física extrema, con la que se ve amenazada la propia vida; la pérdida completa de reglas y de trato social, lo que genera un fuerte impacto sobre los sistemas psicológicos y biológicos del cuerpo; la pérdida de la dignidad, y la transferencia de culpa a las víctimas. La falta de acceso a tratamientos adecuados y la tortura producen secuelas a largo plazo. En el caso puntual de las mujeres, el hecho de quedarse desnudas durante todo el tiempo en que estuvieron en el hospital, puede considerarse como una forma de tortura psicológica.

Según Thomas Wenzel *“Los síntomas de una persona con trastorno por estrés postraumático por haber sido torturada son: la inhabilidad de funcionar dentro de una familia, así como de concentrarse y de dormir adecuadamente; la destrucción completa de las funciones biológicas del cerebro y del cuerpo; la destrucción de los patrones de sueño, presentando pesadillas; y problemas en el trabajo. Para una persona torturada estas secuelas podrían convertirse en algo de por vida si no se da el tratamiento adecuado. El impacto severo sobre la familia se puede convertir en una segunda traumatización. Además, los niños que son expuestos al trauma severo de sus padres sufren consecuencias a largo plazo.”*¹⁰

Ponderó que algunas veces el trauma es tan grave que aún con todo el apoyo y participación familiar, se hace casi imposible de tratar. Asimismo señaló que la tensión que vive la madre puede producir impactos en el desarrollo y en la vida de un niño, especialmente si esta tensión se da en los últimos tres meses de gestación.

Estos casos pueden ser considerados como una tortura psicológica sistemática.

En un estudio realizado como investigadora/becada de la Fundación Carlos Chagas junto a GRAL – Gênero Reprodução e Liderança, basado en investigación jurisprudencial, se presentó la propuesta de que el sistema de justicia y seguridad utilice los informes psicológicos en crímenes sexuales como una prueba más, ya que este tipo de crimen deja secuelas pasibles de ser diagnosticadas por un profesional. Dicha propuesta surgió debido a que Brasil cuenta con un alto índice de impunidad en relación con los crímenes sexuales, pues se prescinde de prueba material, la cual no se realiza en muchos casos (en la mayoría de las ciudades del interior de los estados no existe) y, además, porque la violación ocurre con otras formas de violencia, simbólicas y de ejercicio de poder, que no siempre son de violencia física o de sangre, pasibles de comprobarse en un examen físico. Esta decisión de la Corte contribuye positivamente a la jurisprudencia brasileña en lo que se refiere a los crímenes sexuales, porque evidencia violaciones de género específicas encontradas en prácticamente todos los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, y las secuelas que se producen, ampliando el ámbito en cuanto a las formas de violencia sexual, por lo que se puede desprender que el hecho de mantener a las mujeres desnudas, por ejemplo, puede interpretarse como una forma de violencia sexual.

⁹ Páginas 51 y 52 de la Sentencia Castro y Castro. <http://www.corteidh.or.cr/buscaadores.cfm>

¹⁰ Página 51 punto 2 de la Sentencia Castro y Castro. <http://www.corteidh.or.cr/buscaadores.cfm>

El punto 197.49 de la condena del Estado del Perú en este caso, demuestra que algunas internas e internos heridos fueron transferidos al Hospital de Sanidad y fueron desnudados y obligados a permanecer sin ropa casi todo el tiempo, lo que significó varios días para algunos, y semanas para otros. Había militares armados por todo el hospital y a las mujeres no les daban el permiso de bañarse, o de usar los baños para sus necesidades fisiológicas sin estar acompañadas o con las puertas cerradas.

Otro testimonio que figura en el ítem 197.50 ha mostrado otra forma de violencia sexual sufrida por las detenidas. "Cuando llegó al Hospital de la Sanidad de la Policía una de las internas fue objeto de una "inspección" vaginal dactilar, realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad, bajo el pretexto de revisarla" (párrafos 309 a 313 de la Sentencia).

Las internas transferidas a la cárcel "Santa Mónica de Chorrillos" y de "Cristo Rey de Cachinche" fueron objeto permanente de maltratos físicos y psicológicos. Las mantuvieron sin contacto con el mundo exterior, sin acceso a ningún medio de comunicación, no les permitían conversar o realizar cualquier tipo de trabajo o actividad, no disponían de ningún material de higiene, ni cuando se indisponían. Además de todas las prohibiciones mencionadas anteriormente también sufrieron diversas violencias físicas, en tanto eran objeto de permanentes revisiones íntimas, incluida la inspección vaginal. (197.51).

Es relevante señalar que dentro de este contexto de violencia, las mujeres se vieron afectadas de manera distinta a los hombres. Ya sea por el aspecto biológico relacionado con la menstruación sin que les sea permitido el acceso a medios adecuados de higiene, como por las diversas formas de violencia sexual que sufrieron, con fusiles, con inspecciones vaginales, también en relación con las embarazadas que se encontraban presas en el centro. Los agentes del estado fueron responsables del 83% de los casos de violencia sexual sufrida por las mujeres.

Las mujeres han sido víctimas de una histórica discriminación y exclusión basada en el sexo, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a ciertos tipos de violencia ejercidas contra determinados grupos, por distintas razones. En este caso, las mujeres eran prisioneras y la violencia contra las mujeres suele ser una estrategia de guerra utilizada en los conflictos armados para el avance del control territorial y de los recursos.

Las víctimas fueron mantenidas aisladas e incomunicadas, promoviéndoles un estado de confinamiento del mundo y un control absoluto de su persona, institucionalizándose así la destrucción total y lenta como una forma de tortura, que era intencional. Las condiciones generales de la detención constituyeron una tortura, habiendo sido consideradas una afrenta contra la dignidad humana de las prisioneras. Además, estos ataques sirvieron como una táctica para humillar, aterrorizar y herir el enemigo, ya sea la familia o la comunidad a la que pertenece.

Fue señalado por la Defensoría del Pueblo que la participación de las mujeres en el conflicto armado podría haber influido en el cambio de la percepción que sobre las mujeres tenían las fuerzas armadas, provocando un trato más cruel y violento sobre aquellas mujeres consideradas "sospechosas". Y el ataque, quedó comprobado, empezó justamente en el lugar donde se encontraban las mujeres acusadas o sentenciadas por delitos de terrorismo y traición a la patria (Párrafo 197.13 y 197.20).

Con base en los hechos mencionados fueron alegadas violaciones al artículo 1.1 (Obligación de respetar los Derechos/Responsabilidad del Estado), 4 (Derecho a la vida) y 5 (Integridad Personal), artículo 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana y a los

artículos 1, 6, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y los artículos 4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que entendió existentes las violaciones, llevando el caso a la Corte.

La Decisión de la Corte

Para empezar es relevante decir que la Corte de Derechos Humanos es el órgano competente para tratar el caso, de acuerdo a los artículos 62 y 63.I de la Convención, debido a que Perú es Estado parte desde el 28 de julio de 1978, habiendo reconocido la competencia contenciosa de la Corte el 28 de marzo de 1991, así como la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer el 4 de junio de 1996.

En este sentido, la Corte declaró como derecho fundamental garantizado en la Convención Americana, el derecho a la vida, porque éste es el supuesto esencial para la realización de los demás derechos y, por lo tanto, los Estados tienen la obligación de asegurar las condiciones para que no se produzcan violaciones a los derechos inalienables, en especial que sus agentes atenten contra este derecho. La observación del artículo 4 de la Convención Americana con respecto al artículo 1.1, implica que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa) y que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), en conformidad con el deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Las referidas disposiciones se aplican en conjunto con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta protección debe ser proporcionada por el Estado, mediante sus legisladores, agentes de seguridad y de justicia. En este sentido, la Corte entendió que el artículo 8, que asegura las garantías judiciales, y el artículo 25 sobre protección judicial, ambos de la Convención Americanas, también fueron violados.

La Corte, al analizar los hechos y las consecuencias, tuvo en cuenta que las mujeres fueron afectadas por los actos de violencia de una manera distinta que los hombres, porque algunos actos se dirigieron específicamente a ellas como mujeres. Diversos órganos internacionales vienen reconociendo que las mujeres enfrentan situaciones específicas que afectan sus derechos humanos, como lo son los actos de violencia sexual que muchas veces se utilizan como *“un medio simbólico para humillar a la parte contraria.”*¹¹

Vale señalar que a la violencia sexual se la reconoció en esta decisión como una violencia de género que afecta especialmente a las mujeres.

Se buscará en el análisis demostrar los hechos, en especial los relacionados con la violencia de género y la decisión de la Corte.

Respecto del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, afirmó que en el conflicto armado existió “una práctica de violaciones sexuales y violencia sexual contra las mujeres especialmente”, la cual “es imputable en primer término a agentes estatales, y en menor medida a miembros de los grupos subversivos”. Asimismo, la CVR señaló que durante el referido conflicto los

¹¹ Página 107 de la Sentencia Cfr. O.N.U., Comisión de Derechos Humanos, 54º período de sesiones. Informe presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión. Doc. E/CN.4/1998/54 del 26 de enero de 1998, párrs. 12 y 13.

actos de violencia sexual contra las mujeres tenían como objetivos castigar, intimidar, presionar, humillar y degradar a la población.¹²”

Aunque la obligación de preservar, sancionar y erradicar la violencia por parte del Estado en relación con la Convención de Belém do Pará todavía no estaba vigente en el Perú en la época de los hechos, la Corte sostiene que pueden ser considerados para analizar los efectos de la responsabilidad del Estado los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 de la misma que determina que las normas de interpretación no podrán permitir que se limite derechos consagrados en tratados internacionales de derechos humanos.

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Convención Americana.

Se entendió que el derecho a vivir una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado, previsto en el artículo 3° de la Convención de Belém do Pará, incluyendo el derecho a la protección de otros derechos básicos, abarcaría especialmente el derecho a la vida. Existe, por lo tanto, una conexión integral entre las garantías establecidas en la Convención de Belém do Pará y los derechos y libertades estipulados en la Convención Americana, que se aplica para considerar a la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos.

La Corte declaró que, aún cuando una forma de tortura no es específica hacia la mujer, los impactos podrán ser específicos, sobre todo cuando se tiene el objetivo de atacar a la identidad femenina. La indiferencia relativa a las particularidades ginecológicas evidencia una violencia de género específica reconocida como una forma de tortura en el Artículo 5 de la Convención Americana. Más allá del sufrimiento infligido a las mujeres, el presente este caso se inserta en la definición de violencia contra las mujeres contenidas en el Artículo 2° de la Convención de Belém do Pará.

Para el período de 12 de julio de 1995 en adelante, estas violaciones se constituyeron en una violación del objeto y finalidad de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer firmada por el Perú el 12 de julio de 1995, así como de los artículos 4 y 7 de la misma Convención para el período de 1996 en adelante, desde que el Perú ratificó la Convención el 4 de junio del 1996. El Estado del Perú intencionalmente infligió violencia contra las prisioneras políticas como castigo por su doble transgresión del sistema imperante: el uso del factor género para infligir daño y torturar a las prisioneras, así como la violencia física y psicológica luego de la masacre.

La Corte sostuvo que hubo violación al artículo 1.1 de la Convención, combinado con el artículo 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la misma, debido a que el Estado, luego de ratificar a la Convención de Belém do Pará en 1996, debería haber iniciado las investigaciones correspondientes respecto de las violaciones de derechos sufridas por las mujeres en el centro penal Castro y Castro, lo que no ocurrió.

¹² Página 80, párrafo 225 de la Sentencia Castro e Castro.

El Estado infligió violencia física y psicológica brutal. Esta violencia incluía golpizas frecuentes, la conducta intencional que negaba a las mujeres reclusas con hijos a cumplir su papel de madres, y la negación intencional de atención médica pre y post parto.

Estas medidas de confinamiento de las mujeres las afectaba de modo particular, porque impedían su relación con sus hijos. En general, como los niños no podían ver a sus madres, se intentaba hacerlo a través de las rejas aunque por un rato, y así se empezó a perder el contacto emocional entre ellos.

Las condiciones de detención impuestas a lo/as sobrevivientes violaron a los artículos 4, 5 y 12 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

“La violencia sexual” y la “violación de mujeres como una forma de tortura”. La violencia contra las mujeres incluyó la violencia sexual. Las mujeres fueron sometidas a una gama más amplia de violencias, porque además de la física y la psicológica, las sometieron a actos de penetración y libidinosos. En uno de los casos hay evidencias de que una sobreviviente de la masacre de Castro y Castro fue violada en el hospital de la Policía y hay alegaciones de violencia sexual con la punta de bayonetas contra la prisionera Julia Marlene Peña Olivos, “asesinada extrajudicialmente”.

Las revisiones o inspecciones vaginales de las presas solían ser realizadas por policías enmascarados, que hacían uso de la fuerza, con el fin de intimidación y abuso; estas prácticas eran violaciones flagrantes de los derechos de las prisioneras, lo que constituye violencia contra las mujeres. Por otro lado, solían hacer revisiones vaginales en las visitantes con total ausencia de regulación, éstas eran practicadas por los policías con la excusa de mantener la seguridad en la cárcel. Estas revisiones íntimas también constituyeron violencia contra la mujer, de acuerdo con el entendimiento de la Corte.

Otras formas de violencia sexual incluían amenazas de actos sexuales, manoseos, insultos de connotaciones sexuales, desnudez forzadas, golpes en los senos, entre las piernas y las nalgas. Los golpes en el vientre de las mujeres embarazadas y otros actos humillantes y perjudiciales, fueron también formas de violencia de género contra las mujeres.

De acuerdo con lo señalado por la Corte (*párrafo 227 de la Sentencia*), en el análisis se tuvieron en cuenta los elementos que determinaron la gravedad de los hechos en este caso. La Defensoría de Pueblo señaló que la participación de las mujeres en el conflicto armado cambió la percepción sobre la mujer en aquel contexto, provocando un trato aún más cruel y violento sobre aquellas mujeres consideradas “sospechosas”. Y el ataque, quedó comprobado, fue iniciado justamente en el lugar donde se encontraban las mujeres acusadas o sentenciadas por delitos de terrorismo y traición a la patria (270 párrafos 197.13 y 197.20 de la sentencia).

En cuanto a los aspectos específicos de violencia contra la mujer, la Corte aplicó el artículo 5 de la Convención Americana y fijó sus alcances, tomando en cuenta la interpretación de las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por el Perú en el 4 de junio de 1996, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el mismo país el 13 de septiembre del 1982, vigente en la época de los hechos, ya que estos instrumentos complementan el *corpus juris*

internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, la cual forma parte de la Convención Americana:

Artículo 5.1: Toda persona tiene el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Artículo 5.2: Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Las internas embarazadas que intentaban huir tuvieron que arrastrarse sobre las personas muertas, situación especialmente grave en este caso particular, pues se arrastraban sobre sus vientres, además de haber sido aterrador presenciar estas escenas. Los ataques ocurrieron durante 4 días y las sobrevivientes permanecían junto a los cadáveres, lo que produjo sufrimiento psicológico y emocional intenso. Las mujeres que estaban embarazadas durante el ataque padecieron un sufrimiento adicional, porque además de las violencias sufridas, sentían miedo y angustia de perder a sus hijos.

En el artículo 5 de la Convención Americana y en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, se señala expresamente que los Estados deben velar para que sus autoridades y agentes estatales se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer.

La Corte consideró que debido al grave sufrimiento físico, emocional y psicológico que vivieron lo/as detenido/as del Centro Penal Miguel Castro Castro, se constituye una tortura psicológica inferida en agravio de todos los miembros del grupo, habiendo violado los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Los artículos 1°, 6° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establecen que:

Los Estados Partes se obligan a prevenir y sancionar la tortura en los términos de la Convención Interamericana contra la Tortura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Y aún, los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Se agrega que, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

La Corte consideró, además, que la violación de la integridad física de las señoras Eva Chalco, Sabina Quispe Rojas y Vicenta Genua López, fue agravada por el hecho de que estaban embarazadas y que de este modo dichos actos de violencia les afectaron en mayor medida. Igualmente, la Corte consideró que el Estado fue el responsable por los actos de tortura infligidos a Julia Marlene Olivos Peña, mediante violación del artículo 5.2 de la Convención Americana y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Solamente estas tres mujeres fueron identificadas ante la Corte, pero hay relatos de violencia contra mujeres embarazadas, situación que producía en las demás mujeres una angustia aún mayor cuando ellas eran torturadas o puestas de cabeza hacia abajo.

En cuanto al trato dispensado a las mujeres, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que “no deben sufrir discriminación y deberán ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación”.

Señaló además que las prisioneras deben ser monitoreadas y analizadas por agentes de sexo femenino y que a las mujeres embarazadas y lactantes les deben proveer las condiciones básicas necesarias.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer observó que “esta discriminación entraña violencia basada en género”, es decir, violencia contra la mujer por estar dirigida hacia una mujer, o porque afecta desproporcionadamente a las mujeres, y por incluir “actos que infligen daños o sufrimiento físico, mental o sexual, así como amenazas de que se va a cometer tales actos, coerciones y privaciones de la libertad, entre otros”. (160)

Se probó que en el Hospital de la Policía, las detenidas que se encontraban heridas, en condiciones deplorables, fueron también desvestidas y forzadas a permanecer desnudas por varios días o semanas, y que eran permanentemente vigiladas por agentes armados (párrafo 197.49 de la sentencia).

La Corte consideró que todos los presos fueron sometidos a tortura por un largo periodo, puesto que los obligaron a permanecer desnudos, lo que viola su dignidad e integridad psicológica. En conexión con lo expuesto anteriormente, conviene señalar que tal desnudez forzada tenía el carácter particularmente más grave para las mujeres detenidas, ya que los agentes eran hombres y las mismas tenían prohibido bañarse, así como el acceso a los servicios de salud¹³.

¹³ 157 V. Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas bajo Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobado por la Asamblea General, en su Resolución 43/173, de 09 de diciembre del 1988, Principio 24.

De la misma forma V. sentencia de Flores De la Cruz. *Acórdão* (decisión judicial proferida por los Tribunales) de 18 de noviembre del 2004. Serie C No. 115, pár. 133, y de Tibi nota supra, 150, pár. 154.

158 V. sentencia de Montero Aranguren et al (Centro de Detención de Catia), supra nota 128, pár. 102 e 103; proceso de De la Cruz de las Flores, supra nota 157, pár. 132, y Proceso de Tibi nota supra, 150, pár. 157.

159 Ver las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Trato de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Trato del Delincuente, realizada en Ginebra en 1955, e aprobado por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo 1977, párrafos. 23 e 53.

Ver 160 de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11^a sesión.

Recomendación General 19 "Violencia contra la mujer." Doc HRI/GEN/I/Rev. 1at84 (1994), pár. 6.

En esta misma línea, el hecho de que las mujeres tengan que ir al baño siempre acompañadas por un guardia que les apuntaba con un arma, sin siquiera poder cerrar la puerta al hacer sus necesidades fisiológicas, también fue señalado como una forma de tortura y violencia de género (párrafo 197, 49 de la sentencia). La Corte consideró que estas mujeres fueron víctimas de violencia sexual y violadas en su dignidad personal, pues las mantenían desnudas y cercadas por hombres armados, los cuales aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado del Perú. La violencia sexual sufrida por estas mujeres era permanentemente observada por otros hombres.

La Corte, siguiendo la línea del derecho internacional y teniendo en cuenta las disposiciones de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sostuvo que la violencia sexual se define con acciones de naturaleza sexual cometida contra una persona sin su consentimiento, afirmando, además, que la violencia sexual no se limita necesariamente a los actos relacionados con la penetración o el contacto físico, por lo que el hecho de vigilar a las mujeres en el baño o mantenerlas desnudas, constituyen violación sexual (161).

La Corte hizo hincapié en el contexto en el que estos actos se llevaron a cabo, pues las mujeres estaban sometidas a todas las formas de violencia precisamente por agentes del Estado, los cuales tenían el control total de la situación, por lo tanto las internas se sentían absolutamente indefensas y con miedo permanente, afectando tanto la salud mental de estas mujeres como su dignidad.

Por otro lado, en este caso se probó que una interna que fue trasladada al Hospital de la Policía “fue objeto de una inspección vaginal dactilar, realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad, bajo el pretexto de revisarla”. (Pár. 197.50).

Siguiendo la jurisprudencia dominante tanto en el Derecho Penal Internacional como en el Derecho Penal Comparado, la Corte consideró que la violación no implica sólo relación sexual vaginal sin el consentimiento, sino también la utilización de otras partes del cuerpo o la penetración con objetos, anal u oral, sin el consentimiento de la víctima.

La Corte reconoció que la violación por parte de un agente del Estado es particularmente más grave y condenable, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder presentado por el mismo (162). Además, la violación es una experiencia muy traumática y puede causar graves consecuencias físicas y psicológicas, dejando a la víctima “física y emocionalmente humillada”, situación difícil de superar aún con el paso del tiempo, distinto a lo que sucede en otras experiencias traumáticas (164). Es relevante repetir: los agentes del Estado peruano fueron responsables por el 83% de las violaciones ocurridas.

Ante lo expuesto, y teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 2° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Corte concluyó que ocurrió violencia sexual en la “inspección vaginal” llevada a cabo, habiendo sido una de las formas de tortura a que fueron sometidas las mujeres. Por lo tanto, el Estado fue responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana, así como por la violación de los Artículos 1°, 6° y 8° de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El Reportero Especial de la ONU sobre Violencia contra la Mujer mencionó que la violencia sexual en un contexto de conflicto armado, muchas veces es practicada como una forma de humillar al

adversario y que “la violación es usada por ambos lados, como un acto simbólico” (165). Esta Corte reconoció que la violencia sexual contra las mujeres produce daños físicos, emocionales y psicológicos devastadores, que son agravados en casos de mujeres prisioneras.

Según el Hábeas Corpus 81.288/81 – SC “Los primeros relatos acerca de los trastornos psicológicos derivados del abuso sexual se remontan desde el 1890, a través de las observaciones de Freud (FREUD, 1995; Miller, 1998). En la actualidad, según la American Psychiatric Association Committee on Nomenclature and Statistics (1994), la violencia sexual se suma al Síndrome de Desorden Pos Traumático (SDPT), entidad nosológica desarrollada luego de cualquier evento traumático o extraordinario, dentro de la experiencia humana. Según Breslau et al. (1998), cerca de un tercio de los casos de SDPT son relacionados con el abuso sexual.¹⁴”

La Corte se refirió a ciertos parámetros y pareceres sobre las condiciones de la detención y al trato a que fueron sometidas las presas, y analizó las consecuencias para las mujeres en general y, en particular, para las mujeres embarazadas y madres que perdieron el contacto con sus hijos.

En lo que se refiere al aislamiento de las mujeres, la Corte ya se ha manifestado en otros casos, en cuanto a los efectos del aislamiento prolongado y coercitivo, que constituye trato cruel e inhumano, porque implica una situación de especial vulnerabilidad, aumentando el riesgo de violencias y arbitrariedades en las prisiones. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos determinó que la privación sensorial total usada en conjunto con el total aislamiento social puede destruir la personalidad de un individuo y, por lo tanto, constituye un trato inhumano.

Los efectos del confinamiento solitario fueron especialmente graves para las madres internas. Diversos organismos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tener en cuenta la atención especial que debe brindarse a las mujeres embarazadas y madres, lo que incluye entre otras medidas, las visitas entre madres e hijos. La imposibilidad de comunicarse con los hijos resulta en sufrimiento psíquico grave.

La Corte consideró que las medidas de aislamiento causaron particular sufrimiento a las madres, las cuales fueron privadas del contacto y cualquier tipo de relación con sus hijos. En esta situación se encontraron Yolanka Ruth Quispe, hija de la señora Sabina Virgen Quispe Rojas, y Gabriel Said Challco Huratdo, hijo de Eva Challco. La Corte no contó con elementos que le permitieran identificar a todos los niños que sufrieron la privación de contacto con sus madres, sin embargo, aceptó que todas las personas menores de 18 años a la época que hubieran sufrido dicha privación se presenten ante las autoridades competentes del Estado acreditando su filiación y edad, estableciendo un plazo de ocho meses desde la notificación de la presente Decisión.

Las mujeres fueron tratadas con total negligencia en cuanto a sus necesidades físicas. El Comité Internacional de la Cruz Roja¹⁵ ha establecido que el Estado debe garantizar que las condiciones sanitarias sean suficientes para mantener la higiene y la salud, permitiendo el acceso regular a instalaciones sanitarias, la posibilidad de bañarse y de lavar regularmente sus ropas. Además, la

¹⁴ Página 227 de la Jurisprudência do Caderno Themis Gênero e Direito – Direitos Sexuais. Revista Crimes Sexuais.

¹⁵ Ver OHCHR ONU Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Protocolo Estambul, 2001, párrafo 202. Ver Comité Internacional De la Cruz Roja. Women Facing War: estudio del CICV sobre el Impacto de los Conflictos Armados sobre las Mujeres, de 2001, sec. III, ref. <http://www.icrc.org/0798> y disponible. En el mismo sentido, cf. O.N.U.

Comisión también encontró falta de insumos necesarios para el periodo menstrual de las detenidas, señalando que este aspecto produce sufrimiento adicional a las mujeres.

La Corte consideró que todas las condiciones de la detención y el trato a que fueron sometidos los presos y presas, retirados o transferidos después del Operativo Mudanza I, constituyeron tortura física y psicológica, en violación al artículo 5.2 de la Convención Americana, y 1°, 6° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Por las razones expuestas, la Corte concluyó que el Estado violó el derecho a un trato digno, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en conjugación con el artículo 1.1, extensivo a los familiares.

En particular, en cuanto a la obligación de garantizar el derecho que se reconoce en el artículo 5° de la Convención Americana, la Corte señaló que le corresponde al Estado el deber de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Perú ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer el 4 de junio del 1996, por lo que desde esta fecha debería haber cumplido lo dispuesto en el artículo 7° B de la Convención, en el que se dispone la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia. La referida obligación está reforzada, además, por las disposiciones de los artículos 1°, 6° y 8° de la Convención para Prevenir y Sancionar la Violencia, según la cual los Estados se obligan a tomar medidas efectivas para “prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción y para prevenir y sancionar otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Asimismo, de acuerdo con el dispuesto en el artículo 8 de la Convención, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

En este sentido, la Corte declaró que: “A la luz de la obligación general de garantizar a todas las personas de su jurisdicción los derechos consagrados en la Convención, en el artículo 1.1, juntamente con el derecho a la integridad personal, en los términos del artículo 5° (Derecho a la Integridad Personal) del referido tratado, existe la obligación del Estado de iniciar de oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que permita identificar, enjuiciar y castigar los responsables, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura”.¹⁶

En el presente caso, la Corte consideró que por los hechos declarados como violatorios del derecho a la integridad personal surgió para el Estado la obligación de investigar las afectaciones del mismo de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con el mencionado derecho material protegido por el artículo 5°, aplicando las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Estas disposiciones se aplican al presente caso, pues especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado en lo que refiere al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana.

¹⁶ Página 114, párrafo 345 de la Sentencia Caso Castro y Castro. [Http://www.corteidh.or.cr/buscaadores.cfm](http://www.corteidh.or.cr/buscaadores.cfm)

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, la Corte concluyó que el Estado peruano es responsable por la violación del derecho a la vida, establecido en el artículo 4, la integridad personal, artículos 5.1 y 5.2, y artículos 8.1 y 25, garantía jurídica y protección judicial, de la Convención Americana, todos relacionados con el artículo 1.1, en conjunto con los artículos 1, 6, 8 y 25 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, en conexión con el artículo 7b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra a Mujer, considerándose los 41 fallecidos identificados, los sobrevivientes y familiares de las internas, que se identifican en el anexo 2, en la lista de víctimas de la presente sentencia.

La Corte condenó al Estado Peruano a una Reparación de las víctimas, por el daño material y psicológico, así como también la Reparación mediante las debidas investigaciones sobre los hechos ocurridos en el Centro Penal Miguel Castro Castro y los procesos derivados. Además, el Estado Peruano deberá brindar atención médica y psicológica a quienes necesiten, en razón de los tristes hechos descritos en esta sentencia. Asimismo, el Estado deberá trabajar con Medidas Educativas de capacitación para los agentes del Estado, así como indemnizar a las víctimas y sus representantes respecto a los costos ante la Comisión y la Corte.

En este sentido, la Corte ordena que el Estado del Perú debe publicar la sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de gran circulación, así como realizar un acto público reconociendo su responsabilidad internacional, determinando los plazos para todas las condenas e informando que habrá monitoreo. Asimismo, como medida simbólica importante, determinó “que todas las personas declaradas como víctimas fallecidas en la presente sentencia se encuentren representadas en el monumento denominado “El Ojo que Lloro”.

La sentencia de la Corte en el Caso Castro Castro:

“414. Tal como lo ha señalado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación²¹³. Dicha responsabilidad internacional es distinta a la responsabilidad en el derecho interno²¹⁴.”¹⁷

Se entiende que de la decisión de la Corte surge una estrategia para hacer frente a la violencia sexual en el Derecho interno brasileño y los demás países miembros, mediante el reconocimiento en decisión internacional de los derechos humanos de las mujeres relacionados con la violencia de género y los problemas sociales históricos de violación sexual. Se reconoce, además, la presencia de violencia psicológica, así como la vinculación de estos derechos específicos con el Derecho y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, en especial la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres – Convención de Belém do Pará, ratificada por

¹⁷ Página 138 de la Sentencia Cfr. Caso Vargas Areco, *supra* nota 3, párr. 139; Caso Almonacid Arellano y otros, *supra* nota 15, párr. 134; y Caso Goiburú y otros, *supra* nota 5, párr. 140. Cfr. Caso Vargas Areco, *supra* nota 3, párr. 64 y 140; Caso Almonacid Arellano y otros, *supra* nota 15, párr. 135; y Caso Goiburú y otros, *supra* nota 5, párr. 141.

Brasil en 1995. El derecho universal y genérico demostrando especificidades de género, muy bien fundamentadas en toda la sentencia analizada.

La protección genérica y abstracta de los derechos humanos toma una forma más específica, que considera, justamente, la especificidad de los sujetos de derecho en relación con sus particularidades. No hay cómo defender los derechos sexuales sin tener en cuenta las violaciones a los derechos humanos y las especificidades de quienes históricamente han sido sometidas a la discriminación sexual.

Desde este punto de vista, determinados sujetos de derecho o determinadas violaciones requieren una respuesta específica y diferenciada. Exactamente por ello la incorporación de la perspectiva de género permite la comprensión de que hombres y mujeres tienen necesidades e intereses diferenciados, debido a características específicas, como la sexualidad y reproducción en las mujeres (aborto, muerte materna, mayor vulnerabilidad a la violencia sexual, entre otras). La equidad de género se constituye en un tema central para la efectividad de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque las desigualdades que se observan hacia las mujeres afectan la titularidad de sus derechos. De ahí la necesidad de contar con Convenciones específicas y no sólo con las de carácter universal de protección a los derechos humanos.

Se espera que la decisión de la Corte, que reconoció la existencia de violencia de género en las violencias sexuales sufridas por las mujeres, contribuya en el juicio y decisión de otros casos de violencia sexual, como los que se encuentran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviados por las peticionarias THEMIS y CLADEM Brasil, donde también hay violencia de género perpetrada por el Estado y sus agentes del Poder Judicial, a través de una discriminación implícita, constante en las decisiones de los Tribunales Brasileños, que absolvieron a autores de violencia, un médico y un sacerdote de la Iglesia Católica. Ambos han sometido a las mujeres a violencia real, psicológica y simbólica, sustentados por el poder social que poseen en tanto hombres, blancos, intelectuales, heterosexuales, pertenecientes a las clases dominantes. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguramente, se constituirá en un marco internacional en cuanto al reconocimiento jurídico de la violencia de género sobre los delitos sexuales, los cuales en ciertas circunstancias también se consideran actos de tortura y de expresión de poder sobre las mujeres.

BIBLIOGRAFIA:

BENFICA, F.; FRÓES, K.; VAZ, M. Violência sexual contra mulheres: levantamento epidemiológico na área metropolitana de Porto Alegre – Brasil. *Revista de Estudos Jurídicos*, v. 33, n.º 88, p. 101-116, 2000.

BENFICA, F. S.; SOUZA, J. R.; *A Importância da Perícia na Determinação da Materialidade dos Crimes Sexuais*. Pesquisa - 1997 a 1999. Boletim Interno Faculdade Ritter dos Reis.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2008. Acesso pág. web: http://200.130.7.5/spmu/docs/II_PNPM.pdf, em 01/03/2010.

CEPIA – Cidadania, Estudo, Pesquisa e Ação. *Instrumentos Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos – Os Direitos das Mulheres são Direitos Humanos* – 2001, Rio de Janeiro: Editora CEPIA.

CRUZ, Rubia Abs. Manual de Violência Sexual e Prevenção de DST HIV Aids, 3ª. Edição, Editora Themis, Porto Alegre, 2006.

CRUZ, Rubia Abs. Liberdade Sexual? In Revista Brasileira de Sexualidade Humana, SBRASH Volumen 16 Número 2, Iglu Editora, São Paulo 2005.

CRUZ, Rubia Abs. A prova Material nos Crimes Sexuais. Revista do Ministério Público Número 53, Editora Metrópole, Porto Alegre, 2002.

DOBKE, V. *Abuso Sexual: Uma Abordagem Interdisciplinar*. Porto Alegre: Ricardo Lens Editor, 2001.

ELUF, L.N. *Crimes contra os costumes e assédio sexual: doutrina e jurisprudência*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1999.

<http://www.corteidh.or.cr> – Jurisprudencia Internacional

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, CEDAW – Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - Cepia, Rio de Janeiro, 2001.

ZULUOGA, Patrícia Palácios, Las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y la Perspectiva de Género. Primera Edición - Chile, Diciembre del 2005.

MITIDIEIRO, A.C. - Dados coletados no Serviço de Atendimento Psicossocial do Departamento Médico Legal de Porto Alegre no ano de 2000. Boletim interno DML

NETO, J. A.; MATTAR, R. & COLÁS, O. R. *Violência Sexual Contra a Mulher – Atualização*, Levantamento de Dados do Setor de Sexologia Forense do Instituto Médico Legal de São Paulo, 1995. Disponible en: <http://www.sogesp.com.br/protocolos/atualizacao/atualizacao22html>. Acesso en 16/06/2002.

PIMENTEL, S.; SCHRITZMEYER, A. L.; PADJIARJIAN, V. *Estupro: Crime ou Cortesia? Abordagem Sócio Jurídica de Gênero*. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998.

O PROGRESSO DAS MULHERES NO BRASIL, Direitos Civis e Políticos: a conquista da cidadania brasileira; Piovezan, Flávia. Páginas 32 a 52. UNIFEM, Brasília 2006.

O PROGRESSO DAS MULHERES NO BRASIL, Um Instrumento de conhecimento e atuação Política; Pitanguy, Jaqueline; Barsted, Leila Linhares; Miranda, Dayse; páginas 11 a 31; UNIFEM, Brasília 2006.

ROVINSKI, S. Realidade Mensurável. *Cadernos Themis Gênero e Direito – Crimes Sexuais – Volumen I*. Porto Alegre: Editora Sulina, 2000.

ROVINSKI, S. L. R. Dano Psíquico em Mulheres Vítimas de Violência Sexual – Rio de Janeiro - Editora Lumen, 2004

SAFFIOTI, Heleieth I. B. *Contribuições Feministas para o Estudo da Violência de Gênero*. Labrys, Estudos Feministas, 2002. Disponible en:

<http://www.unb.br/ih/his/gefem/labrys1_2/heleieth1.html> Acceso en: 20 abril, 2008.

SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: *Revista Educação e Realidade*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, v. 20, jul/dic 1995.

WOLF, Cristina Scheibe. Jogos de gênero na luta da esquerda armada no Brasil; 1968-1974. In: WOLF, Cristina Scheibe; FÁVERI, Marlene de; RAMOS, Tânia Regina Oliveira (Org.). *Leituras em rede gênero e preconceito*. Florianópolis: Editora Mulheres, 2007.

VADE MECUM, Série Práxis. Filho, Nylson Paim Abreu organizador. Copilação de todos os Códigos Nacionais, Constituição Federal, Súmulas dos Tribunais Superiores, e legislações complementares. Editora Verbo Jurídico, Porto Alegre, 2009.

VARGAS, J. D. *Crimes sexuais e sistema de justiça*. São Paulo: IBCCrim, 2000.

VIGARELLO, G. *A História do Estupro: violência sexual nos séculos XVI – XX*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.